

Devuélvanse sus actuaciones al Juez remitente con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio tres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Monterrey por el C. Lic. Simon de la Garza y Melo, contra un auto del Juez 3º de lo Civil de aquella Ciudad, que declaró en formal prision al quejoso.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiéndose presentado el C. Lic. Ignacio Galindo, como defensor del Lic. D. Simon de la Garza y Melo, pidiendo amparo para este último, contra el auto de formal prision dictado por el Juez 3º de letras de esta 1ª fracción judicial, en la acusacion que tiene hecha en su contra el actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, imputándole falsedad en la declaracion que dicho Sr. Garza y Melo rindió ante la Seccion del gran Jurado que encausó al expresado Sr. Presidente, por el delito de haber ejercido su profesion de abogado y servido de apo-

derado en negocios agenos, siendo á la vez Magistrado, por cuyo delito, habiéndoselo declarado responsable, se declaró compurgado con el tiempo que estuvo separado de su encargo; se ha servido ese Juzgado, segun su auto de esta fecha, dar conocimiento al que suscribe, de tal peticion, para que emita su juicio ó parecer, con vista de lo dispuesto en el art. 8º de la ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869, y 25 de la misma, sobre si debe ó no darse entrada al amparo.

Y obsequiando el Fiscal la prevencion contenida en tal auto, entrará al examen de la cuestion propuesta, teniendo á la vista, no solo lo dispuesto en los artículos citados de la ley reglamentaria referida, sino lo dispuesto tambien en la Constitucion general del país, que es la suprema ley, y lo que sobre el particular han expuesto jurisconsultos eminentes, tanto nacionales como extranjeros, á fin de que la opinion que emita en tal cuestion, si no es la verdadera, no sea tampoco contraria al espíritu de la ley fundamental, que en todos casos, condiciones y circunstancias debe ser atendida, antes que ninguna otra; y entrará tambien en esa discusion, en la que desde luego confiesa, no será el primero en la concepcion de los principios y raciocinios que va á exponer, porque considera que las leyes establecidas reglamentando ó organizando los derechos de los ciudadanos, otorgados en la Constitucion de un país, vienen á ser complemento y garantía de esos mismos derechos; y por esto conviene en caso de un conflicto, entre la ley fundamental y la reglamentaria entrar á una concienzuda discusion con objeto de hacer, en un caso dado, prevalecer la que esté mas conforme con la razon, la justicia, la equidad y con los derechos de los mismos ciudadanos, en cuyo favor se hayan dado.

Fácilmente se comprenderá por lo dicho, que existe una patente contradiccion, entre la ley reglamentaria ya citada y lo dispuesto en la Constitucion política; en la prime-

ra (art. 89.) textualmente se dice: *que no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales*; y en la segunda, (art. 101. fracción 1ª.) también se dice textualmente: *que los Tribunales de la federación, resolverán toda controversia que se suscite*.

Primero: Por leyes ó actos de *cualquiera autoridad* que violen las garantías individuales.

¿Que hacer, pues, para preferir la ley que sea mas conforme á la razon, ó la justicia, que sea la mas constitucional; por decirlo así?.....Sería muy bueno para esto y ello contribuiría á dar mayor ilustración á tal cuestion, el que se entrase al examen y discusion de esas dos leyes, remontándose hasta llegar á *su razon de ser, de su existencia*; pero no hay ciertamente necesidad de ello, por que como se ha dicho, hay tambien consignado textualmente en la misma Constitucion, la facultad otorgada á los Tribunales federales, para conocer de toda controversia que se suscite por actos de *cualquier autoridad* que violen las garantías individuales; y siendo la autoridad judicial una de esas autoridades á que se refiere el precepto constitucional, no cabe duda de que á ella, antes que á la reglamentaria, nos debemos atener para resolver este caso, opinando desde luego, por la admission del recurso interpuesto.

Además, en la misma Constitucion tenemos otro artículo, y por cierto, muy terminante (el 126.) en que se declara ser la Constitucion la Suprema ley del país. Es verdad que la ley de que se trata, es tambien general, expedida por el Soberano Congreso de la Union, y como tal debe obsequiarse; pero tambien es verdad que ella en su art. 89 importa una reforma á la Constitucion, pues quiere que los actos de la autoridad judicial, no sean, (aunque con ellos se violen las garantías individuales) de los que puedan conocer los tribunales federales; y como esa reforma no se ha hecho con las formalidades y requisitos establecidos en la propia Constitucion, (art. 127) de aquí es,

que no deba ser obsequiada tal ley, ni la parte en que está opuesta á la Constitucion.

Ahora, fundando la opinion, que ya ha iniciado el Fiscal, de que en su concepto procede el amparo, no obstante lo dispuesto en el citado art. 89, no creo por demás exponer algunas consideraciones generales sobre las razones que probablemente se tuvieron presentes al consignar en la Constitucion la facultad amplísima que se concede al poder judicial para intervenir en los actos de toda autoridad, aun la legislativa, que violen las garantías individuales; reflexiones que quitaran todo escrupulo sobre cual sea la ley á que nos debemos atener en el presente caso.

La bondad de una Constitucion, consiste, no solo en que ella sea conforme con los hábitos y costumbres de los pueblos para que se dé, sino principalmente, en que provea de medios para hacer siempre efectivas las garantías que otorgue á los ciudadanos y aun hasta á los extranjerios en el país en que ella rija; y que todo ello se consiga pacíficamente y sin ningun estrépito. Buscando precisamente este perfeccionamiento en las constituciones, se ha venido en establecer, primero en los Estados-Unidos, y luego entre nosotros: que el poder judicial, sea el encargado de interpretar las leyes, aplicarlas en cualquiera controversia que se suscite, aun para actos de los otros poderes, y del mismo judicial, que violen las garantías individuales. Dando, aunque suscintamente, una idea de los fundamentos que se tuvieron presentes para establecer los principios poco ha sentados; de que el poder judicial sea el encargado de conocer de toda controversia de actos en que se viole alguna garantía, citaremos las palabras de un célebre escritor Hamilton: *cuando se consideran atentamente los diferentes departamentos del poder, se percibe que en un Gobierno, en que cada uno de ellos está separado de los demás, el judicial por la naturaleza de sus funciones, es el menos peligroso á los*

*derechos políticos de la Constitucion, por que tiene menos capacidad para atacarla, ó perjudicarla. Otro no menos célebre, dice á este mismo respecto: la independencia judicial, no es menos útil, considerada como un freno del poder legislativo, que algunas veces está dispuesto por espíritu de partido ó por tentaciones del interés, á sacrificar los derechos Constitucionales.....*

Vemos pues, por la opinion de estos respetables autores, que el poder judicial está encargado de interpretar y aplicar las leyes aun contra disposiciones del mismo legislador. El Fiscal recuerda tambien, aunque en el acto no puede especificar el caso, que la Suprema Corte, acatando el precepto Constitucional contenido en el art. 101, ha mandado abrir el juicio de amparo en un negocio judicial.

Esto supuesto, es de opinion el Fiscal, que en el caso bien se puede admitir el recurso que se interpone por el Lic. Galindo, el que admitido, ya se tramitará como previene la ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo informe á la autoridad para suspender ó no desde luego el acto reclamado, y siguiendo el juicio sobre lo principal hasta pronunciarse sentencia definitiva, segun fuere esta de justicia.

Tal es la opinion del que suscribe; que puede ese Juzgado adoptar, si le pareciere justa y conforme á derecho.

Monterey, ocho de Junio de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Antonio María Elizondo.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Monterey, Junio nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el ocurso que ha presentado el C. Lic. Ignacio Galindo como defensor del Lic. D. Simon de la Garza y Melo, pidiendo amparo contra un auto que dictó el C. Juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, declarándolo bien preso

en la sumaria que le instruye por acusacion que le hizo el C. Lic. Secundino Roel con poder del C. Lic. Lázaro Garza Ayala Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de haber dado una declaracion falsa en la causa que á éste le formó el Congreso del Estado en calidad de gran Jurado, por delitos oficiales de que tambien fué acusado; fundando el amparo, en que por el auto citado se ha violado la garantía que acuerda el art. 18 de la Constitucion general, para que á nadie se le ponga preso sino por delitos que merezcan pena corporal, en cuyo predicamento supone no encontrarse el delito de que ha sido acusado su defensor: visto el auto en que se mandó dar traslado al Ministerio fiscal, para resolver si debe ó no abrirse el juicio de amparo; el parecer que emitió, opinando por la afirmativa, fundado en que estando en contradiccion el artículo 8º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 con el 101 de la Constitucion general, debe estarse á este, en que se previene que los Tribunales de la Federacion deben resolver toda controversia que se suscite por leyes ó actos de *cualquiera autoridad* que violen las garantías individuales; y no el primero, que dispone no se admita el recurso de amparo en negocios judiciales; trayendo además en su apoyo la opinion de escritores y personas respetables, y un caso en que la Suprema Corte de Justicia mandó abrir el juicio de amparo en un negocio judicial, acatando el artículo constitucional. Considerando: que este artículo es textualmente el mismo que forma el 1º de la ley orgánica, y no puede decirse que el 8º está en contradiccion con aquel, porque no ha negado el recurso de amparo contra las autoridades judiciales, sino *en los asuntos judiciales*, puesto que no todos los actos de los Jueces merecen tal denominacion, sino aquellos que se someten á todas las formas que las leyes previenen en los juicios: que en tal virtud, el acto de un Juez que, sin forma, ni figura de juicio, mandara privar á un hombre de la vida ó

le arrebatará su fortuna, no debe llamarse negocio judicial, por que esto sería una violación flagrante de las garantías individuales, como opina el ilustre escritor D. Francisco Zarco en el artículo de fondo publicado en el número 127 del *Siglo XIX*, 7ª época, correspondiente al 7 de Mayo de 1869, y en este caso evidentemente cabría el amparo: que en la causa que instruye el Juez 3º de Letras contra el Lic. D. Simon de la Garza y Melo por delito de falsedad, se le han guardado las garantías individuales que consigna el art. 20 de la Constitución general de la República, y que si bien lo declaró bien preso, tiene el recurso pronto y expedito de apelar del auto y pedir su revocación ante el Supremo Tribunal del Estado: que si en estos asuntos judiciales, seguidos por todos los trámites que las leyes designan; y donde las partes tienen varios recursos para reclamar sus derechos, se admitiera el extraordinario de amparo, no darían paso los Tribunales comunes, sin verse embarazados por la justicia Federal, que al fin los nulificaría atacando así la independencia y soberanía del poder judicial de los Estados en los negocios que la misma carta fundamental de la República ha dejado bajo su competencia: que siendo bien claro y terminante el art. 8º de la ley orgánica, y no habiéndose presentado en contrario algunos casos en que la Suprema Corte de la Nación haya decretado el amparo en asuntos realmente judiciales como este, en que no se ha privado al acusado de ninguna de las garantías que le acuerda el art. 20 de la Constitución, ni de otros recursos que las leyes del Estado le conceden, no hay motivo alguno porque dicho art. 8º no deba acatarse al decidir la cuestión que se presenta; tanto mas, cuanto que la ley orgánica referida emana de la Constitución, y es la *Suprema* ley, lo mismo que ésta, según lo dispuesto en el art. 126. Por tales consideraciones, y de conformidad con lo prevenido en el repetido art. 8º, este Juzgado de Distrito decreta: que es improce-

dente el recurso intentado, y que en consecuencia no debe abrirse el juicio de amparo. Notifíquese y mándese publicar este auto en el periódico oficial del Estado, remitiéndose el expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revisión, con copia de este auto y del dictámen fiscal, conforme á su circular de 31 de Diciembre último. Yo el Juez de Distrito de este Estado así lo decreté y firmé, actuando con testigos de asistencia: doy fé.—*Lic. José María Martínez.*—*A. Carlos Ilanderos.*—*A. Abelardo Morelos.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Simon de la Garza y Melo, ante el Juzgado de Distrito de Monterrey, contra un auto del Juez 3º de lo civil de aquella ciudad declarando en formal prisión al quejoso, quien alega haberse violado en su persona las garantías que otorga el art. 18 del pacto fundamental de la República. Vistas las constancias de autos, y considerando: Que aunque el Juzgado de Distrito al conocer en la demanda de amparo en que se precisaba el acto y se señalaba la garantía violada, no ha sustanciado el juicio hasta declarar si había lugar á que los Poderes de la Federación amparasen y protegiesen al quejoso en las garantías constitucionales cuya violación se señalaba, se ha tenido á la vista tanto el escrito de demanda como la copia certificada del auto, que la autoridad ejecutora hubiera mandado como informe justificado. Considerando: que dicha autoridad ha obrado en la órbita de sus atribuciones al dictar el auto que motiva el presente recurso, sin que la Suprema Corte de Justicia pueda entrar en la apreciación de los fundamentos con que los

haya dictado. Se declara: que no ha lugar al amparo solicitado por el C. Simon de la Garza y Melo, contra el auto dictado por el Juez 3º de lo civil de Monterey, en la causa que por falsedad se le sigue al peticionario.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México Julio tres de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Brígido Mora, Síndico del Ayuntamiento de los Reyes contra el C. Victoriano Arévalo, Presidente del mismo Ayuntamiento, por haberlo arrestado cuatro días.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el juicio de amparo que promueve el C. Brígido Mora, como síndico del Ayuntamiento de los Reyes, contra el C. Victoriano Arévalo, Presidente del mismo, por haberlo reducido á prision sin causa ni motivo justificado, aparece confirmado el hecho por las declaraciones de los testigos que presentó la parte quejosa dentro del térmi-

no correspondiente, y se registran de las fojas 4 á la 6 del cuaderno respectivo, en las respuestas referentes á la segunda, tercera y cuarta pregunta del interrogatorio de las fojas 2 y 3. Consta por lo mismo demostrado que el Síndico del Ayuntamiento al negarse á firmar el recibo que motivó el enojo del Presidente del Ayuntamiento, lo hizo con razon bastante, supuesto que al recibo de que se trata debió preceder la confronta de los parciales que antes se habian expedido. Los mismos testigos declaran, que no hubo otro hecho que precediera á la orden de prision, ni mucho menos el que se hubieran cometido las faltas de que habla el C. Arévalo, quien tiene en su contra los justificantes de su carácter iracible. De las mismas pruebas, resulta que es enteramente falso el hecho que se afirma en la comunicacion que se registra á la foja 16, pues á la fecha en que se pidió al Presidente del Ayuntamiento el informe justificado, se encontraba el mismo Arévalo en la Villa de los Reyes, habiendo regresado de su viaje de Colima. Que aun en ese tiempo haya estado gozando de su licencia, no es una excusa bastante legal para que se hubiera negado á ministrar al sustituto los datos relativos á este negocio, engañando á este Juzgado al asegurarle que no se cumplian sus órdenes por ausencia del responsable.

Lo expuesto anteriormente bastaria para que no se tomara en consideracion el informe justificado que se ha remitido con posterioridad; pero aun suponiéndoselo legalmente extendido, no quedan desvanecidos los hechos en que se funda la solicitud del quejoso, porque de los testigos examinados á peticion del C. Arévalo, dos deponen de oidas acerca del hecho de las faltas atribuidas á Mora y otro, socio de comercio de Arévalo, siendo por lo tanto ineficaces sus dichos. Leyes 18, 20, y 32, título 16, part. 2ª

En atencion á todo lo expuesto, el Promotor fiscal reforma su pedimento de la fo-